ideal.es Espana

ESPAÑA

# La economía en campaña

El debate Pedro Solbes-Manuel Pizarro ha resumido el distinto diagnóstico que efectúan los dos grandes partidos sobre las consecuencias de las incertidumbres económicas. El autor constata que la campaña estará repleta de argumentos y promesas vinculadas a esta materia, aunque cuestiona el impacto que pueda tener la actual coyuntura en los resultados del 9-M

23.02.08 - ROBERTO VELASCO

SE dice que los políticos viven bajo la tiranía del corto plazo, porque los votantes están más atentos a los beneficios inmediatos que les puede reportar su apoyo electoral que a los rendimientos futuros. Y es verdad. Schumpeter dejó escrito que si se ofrece la oportunidad de una «recompensa pecuniaria» a cambio del voto, una experiencia de siglos demuestra que la gran mayoría de electores reacciona rápida y racionalmente aceptando el ofrecimiento. Y no hay que ir muy lejos para confirmarlo (aparte la broma del internauta español que hace un par de semanas subastó su voto en eBay), puesto que la compraventa de sufragios es todavía habitual en países donde la bandera de la democracia parlamentaria está aún poco desplegada.

Afortunadamente, la democracia española está hoy homologada internacionalmente y las batallas electorales se desarrollan entre nosotros con suficiente limpieza. Todo lo cual no impide que, a la hora de hacer más atractiva que ninguna su propuesta a los ciudadanos, bastantes políticos se hayan acostumbrado a ofrecer duros a cuatro pesetas cuando se acercan las elecciones. En esta ocasión, las ofertas consisten en sustanciosas reducciones de impuestos capaces de hacerles la boca agua a los contribuyentes, aunque los intentos de seducir a los indecisos se apoyan también en promesas de incremento del gasto público tan golosas para un gran número de votantes como el aumento de las pensiones. Los Presupuestos futuros pueden resentirse más o menos si las promesas electorales se cumplen, que esa es otra, pero nunca se quejan cuando se realizan. Por eso, una vez puestos a rizar el rizo en materia de captación del voto, nuestros políticos pretenden convencer a los ciudadanos de que se pueden alcanzar objetivos económicos incompatibles entre sí.

Las circunstancias descritas pueden ser decisivas en la campaña electoral. En este sentido, el debate del jueves entre Solbes y Pizarro fue sólo un primer combate-exhibición de dos estilistas que puso de manifiesto el divorcio entre los síntomas que presenta la economía española y los antitéticos diagnósticos de la misma que hicieron ambos contendientes. Los dos combates estelares que librarán Zapatero y Rajoy serán probablemente más cruentos porque, después de un largo período de fuerte crecimiento económico y gran creación de empleo, la economía española ha empezado a mostrar evidentes síntomas de desfallecimiento, que se agudizan semana tras semana para desesperación de los políticos en el poder y oportunidad de crítica para quienes aspiran a desplazarles democráticamente de él. Los datos están ahí y son los que son: unos, como el diminuto crecimiento de la productividad, el desorbitado aumento del déficit por cuenta corriente o el diferencial de la tasa de inflación respecto a nuestros principales proveedores y clientes son, por antiguos, bien conocidos; otros más recientes tienen que ver con la caída de un sector de la construcción que ha liderado la tasa de crecimiento durante años. Además están, por supuesto, las consecuencias del cambio coyuntural impulsado por la crisis de las hipotecas de alto riesgo y su impacto en la crisis del crédito internacional y en la volatilidad bursátil. Todo lo cual ha provocado un franco deterioro de la confianza en el futuro de las familias españolas.

Los indicadores de coyuntura (inflación, empleo, tasa de crecimiento, etc.) son en todo momento afiladas armas arrojadizas utilizables en la lucha política. Armas que sirven tanto en momentos de crisis como de bonanza económica, porque siempre ofrecen oportunidades para el ataque o la loa gubernamental, especialmente en período electoral: para la oposición, las malas situaciones económicas (como las que ahora se barruntan) son siempre provocadas por la torpeza del gobierno, mientras que las épocas de fuerte crecimiento del PIB y del empleo (como la de la legislatura que termina) son hijas bien de factores externos o consecuencia directa del legado económico de los ahora opositores. Y es también perfectamente conocido que desde el gobierno se cuenta la misma historia, pero al revés, pues la coyuntura económica es también del color del cristal político con el que se mira y siempre se espera que alguna reconocida crisis internacional ayude a esconder los errores propios.

Así pues, la campaña electoral va a estar repleta de argumentos económicos, algunos más falsos que un billete de seis euros, pese a que no está nada clara la influencia de la coyuntura en los resultados electorales. Los profesores Sáez y Jaime (**Universidad de Granada**), estudiosos de esta materia, estiman que «los cambios en la situación económica pueden explicar alrededor de un tercio del cambio de voto que se produce entre elecciones», siendo el desempleo y la inflación las variables que tienen una influencia más destacada. ¿Por qué, entonces, tanta inclinación a encontrar en la evolución económica un argumento de uso electoral? Pues probablemente porque la memoria colectiva es muy frágil, dado que los problemas que han ido modelando los pies de barro de la economía española durante estos cuatro últimos años son los mismos que existían en la legislatura anterior y los éxitos (especialmente los derivados del control de las cuentas públicas) del PP y del PSOE han sido también coincidentes y ninguno de los dos equipos de gobernantes ha sido capaz de introducir más competencia en los mercados.

Por otro lado, las posibilidades del gobierno español en la conducción de la economía se han ido reduciendo con el tiempo, aprisionadas entre las competencias e instrumentos cedidos a las instituciones europeas y a los poderes regionales. De una parte, la pertenencia a la eurozona le impide gestionar la política monetaria y utilizar la política de tipo de cambio para recuperar la competitividad perdida. Por otro, la descentralización política ha dejado en manos de la Administración central apenas el 22% del gasto público (mucho menos de lo recomendado en un Estado federal), con lo que difícilmente puede realizar una política fiscal contracíclica, puesto que el grueso de la capacidad inversora la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De ahí que muchas de las promesas electorales tengan aspecto de lo que en términos taurinos se conoce como 'brindis al sol'.